



# Asamblea General

Distr. general  
22 de enero de 2020  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

#### Opinión núm. 73/2019, relativa a nueve menores de edad (cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo) (Bahrein)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 10 de julio de 2019 al Gobierno de Bahrein una comunicación relativa a nueve menores de edad. El Gobierno respondió a la comunicación el 6 de septiembre de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional,



étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. La fuente presenta los casos de nueve menores de edad bahreiníes. Según la fuente, los casos demuestran una pauta de detenciones arbitrarias en Bahrein. En el anexo figura un resumen de las alegaciones\*.

#### **Menor de edad A**

5. El menor de edad A es un varón de 15 años de edad. El 12 de noviembre de 2018 un agente de la comisaría de policía de Al-Maarid se puso en contacto con el padre del menor de edad A y le pidió que al día siguiente llevara a este, que por aquel entonces tenía 14 años, a la Fiscalía. Según la fuente, la policía no informó al padre del menor de edad A del motivo de la citación. El 13 de noviembre de 2018 el menor de edad A fue con su padre a la Fiscalía de Manama, donde fue detenido por agentes de policía del Ministerio del Interior que informaron a su padre de que iban a trasladarlo al Centro de Menores de Ciudad Isa.

6. El día de la detención del menor de edad A las autoridades lo acusaron de participación en una reunión ilegal y en disturbios y de tenencia de cócteles molotov. Según la fuente, el menor de edad A confesó por miedo haber participado en una reunión ilegal. Sin embargo, denegó las otras acusaciones y dijo a la policía que simplemente había estado presente en una manifestación en Karbabad y que no llevaba nada en las manos.

7. La policía trasladó al menor de edad A a la comisaría de policía de Al-Maarid para interrogarlo. Al cabo de unas dos horas, lo devolvieron al Centro de Menores de Ciudad Isa. La fuente alega que las autoridades mantuvieron al menor de edad A en régimen de incomunicación tres días después de su detención, cuando pudo llamar a su familia. Solo se permitieron visitas de la familia del menor de edad A cuando había pasado una semana desde la detención. Las autoridades mantuvieron recluido una semana al menor de edad A mientras se procedía a su investigación. La policía lo llevaba cada semana a la Fiscalía para prorrogar el período de reclusión hasta que se le impusiera una condena.

8. La fuente informa de que se juzgó al menor de edad A en el curso de tres vistas judiciales celebradas los días 23 y 30 de diciembre de 2018 y 6 de enero de 2019. Solo se reunió con su abogado dos veces, en el curso de las vistas de los días 23 y 30 de diciembre de 2018. El tribunal declaró al menor de edad A culpable de participación en una reunión ilegal y lo condenó a seis meses de reclusión en el Centro de Menores de Ciudad Isa. La condena contemplaba la posibilidad de prorrogar la reclusión otros seis meses a no ser que el menor de edad A obtuviera un certificado de buena conducta. Ni el abogado ni los progenitores del menor estuvieron presentes en la vista del 6 de enero de 2019, en la que se dictó sentencia. Cuando los progenitores del menor de edad A preguntaron a un agente de policía cómo podían recurrir, se les dijo que el recurso sería “inútil” y que el menor de edad A debía cumplir la condena de seis meses.

9. El menor de edad A sigue recluido en el Centro de Menores de Ciudad Isa.

#### **Menor de edad B**

10. El menor de edad B es un varón de 16 años de edad. El 13 de mayo de 2018, cerca de las 3.45 horas, agentes de paisano que llevaban máscaras y venían acompañados de policía antidisturbios que vestían uniformes amarillos irrumpieron en el domicilio familiar del menor de edad B, que por entonces tenía 15 años, y lo detuvieron. La fuente alega que la policía no declaró el motivo de la detención del menor de edad B ni presentó órdenes de registro del domicilio o de detención.

---

\* Se reproduce como se recibió, en el idioma en que se presentó únicamente.

11. A las 6.00 horas del día de su detención, el menor de edad B llamó a su familia para decirle que se encontraba en la Dirección de Investigación Judicial. A los 15 días, el menor de edad B pudo llamar de nuevo a su familia para informarle de que permanecía en la Dirección. Sin embargo, la policía nunca llevó al menor de edad B a la Dirección, sino que lo mantuvo recluido en el edificio de investigaciones de la cárcel de Jau.

12. Según la información recibida, las autoridades mantuvieron al menor de edad B recluido en el edificio de investigaciones de la cárcel de Jau durante 35 días de interrogatorio. El abogado del menor de edad B no estuvo presente durante los interrogatorios, como tampoco se permitió al menor ponerse en contacto con él mientras fue interrogado. Durante los interrogatorios, las autoridades golpearon, maldijeron, vendaron los ojos y esposaron al menor de edad B y lo obligaron a permanecer de pie por períodos prolongados. Las autoridades obligaron al menor a declararse culpable de delitos como participar en disturbios y llevar bombas y cócteles molotov, así como a implicar a otras personas en actividades delictivas, pese a que no las conocía. La familia del menor de edad B no supo que nunca estuvo en la Dirección de Investigación Judicial hasta el 22 de junio de 2018.

13. El 17 de junio de 2018 las autoridades trasladaron al menor de edad B al centro de detención Dry Dock. El menor de edad B llamó a su familia para informarles de su paradero. La familia del menor de edad B lo visitó finalmente en Dry Dock el 22 de junio de 2018.

14. La fuente sostiene que el 8 de septiembre de 2018 un agente de Dry Dock insultó y golpeó al menor de edad B. El agente lo pisoteó con los zapatos en la cara, que además roció con gas pimienta, a raíz de lo cual el menor de edad B vomitó repetidas veces. Después de que la familia del menor presentara una denuncia ante el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior, las autoridades trasladaron al agente a otro pabellón, pero no informaron a la familia de que se emprendieran investigaciones ni se adoptaran medidas para sancionar al agente.

15. Según la fuente, las autoridades acusaron de espionaje al menor de edad B. Los interrogadores nunca le informaron de la acusación de espionaje, como tampoco lo interrogaron al respecto. El menor de edad B solo supo de la acusación a través de sus progenitores, a quienes había informado el abogado. Un tribunal absolvió al menor de edad B el 16 de octubre de 2018. Durante la vista judicial se informó al abogado del menor de un nuevo caso emprendido contra él en el que era acusado de participar en disturbios y llevar bombas y cócteles molotov en el caso de “la coalición del 14 de febrero”.

16. El 27 de diciembre de 2018 el tribunal declaró culpable al menor de edad B y lo condenó a siete años de prisión, le retiró la ciudadanía bahreiní y le impuso una multa de 200 dinares. El tribunal condenó al menor de edad B sobre la base de confesiones forzadas hechas por terceros. Además, no se le permitió presentar pruebas por su parte, como tampoco se le permitió impugnar las pruebas presentadas contra él. Se había programado un recurso para el 25 de marzo de 2019. La fuente alega que las autoridades penitenciarias transportaron al reo al tribunal, pero lo obligaron a permanecer en el autobús. El menor de edad B permanece recluido en Dry Dock, donde espera el resultado de su recurso.

#### Menor de edad C

17. El menor de edad C es un varón de 16 años de edad. Según la información recibida, agentes de la Dirección de Investigación Judicial citaron varias veces en 2018 al menor de edad C, en particular el 13 de febrero, el 22 de mayo y el 1 de agosto, pero no explicaron el motivo de la citación. Se citó al menor de edad C como táctica de intimidación en el marco de las acusaciones y condenas de algunos de sus familiares por varios cargos.

18. El 10 de septiembre de 2018, cerca de las 3.30 horas, agentes vestidos con ropa de civil y agentes del mando de la fuerza especial de seguridad irrumpieron en el domicilio del menor de edad C. Este tenía 15 años. Tras su detención, el menor llamó a su familia para decirle que se encontraba en la Dirección de Investigación Judicial. La fuente alega que durante los dos primeros días de la permanencia del menor en la Dirección los agentes le vendaron los ojos y lo esposaron, lo privaron de alimentos y de agua, le metieron zapatos en la boca, le obligaron a ponerse de pie y lo golpearon. Al cabo de 21 días de reclusión, las

autoridades lo trasladaron a Dry Dock. El menor de edad C presentaba señales de tortura, así como una pérdida de peso considerable, pérdida de equilibrio y un recuento de glóbulos rojos anormalmente alto.

19. En septiembre de 2018 las autoridades acusaron al menor de edad C de lanzar dos ataques contra las fuerzas de seguridad de Diraz y arrojar en Sitra una bomba falsa. El 28 de octubre de 2018 las autoridades lo pusieron en libertad, pero mantuvieron las acusaciones y celebraron vistas judiciales, algunas de ellas en rebeldía.

20. La fuente informa de que el 16 de enero de 2019 el menor de edad C se encontraba en un vehículo en las inmediaciones de su domicilio cuando lo rodearon agentes vestidos con ropa de civil y agentes de policía antidisturbios vinculados con el Ministerio del Interior. Irrumpieron en su domicilio e interrogaron a un familiar. Los agentes detuvieron al menor de edad C sin presentar una orden judicial ni explicar los motivos de la detención. Lo llevaron a la Dirección de Investigación Judicial, donde fue interrogado durante tres días y sujeto a tortura. El menor de edad C pasó unos 20 días en la Dirección.

21. La fuente alega que el 5 de febrero de 2019 las autoridades llevaron al menor de edad C a la Fiscalía sin informar de ello a su abogado. Fue acusado de arrojar una bomba falsa en la localidad de Al-Daih, organizar marchas en Diraz en 2018 y participar en una reunión ilegal. El 6 de febrero de 2019 las autoridades lo trasladaron a Dry Dock. Su familia lo visitó por primera vez el 7 de febrero de 2019, transcurridos 23 días desde su detención.

22. El 13 de febrero de 2019 un tribunal condenó al menor de edad C por dos cargos relacionados con los atentados de Diraz imponiéndole una pena de seis meses de prisión y una multa de 200 dinares y se incautó de teléfonos móviles y una cámara. Sin embargo, el tribunal suspendió la ejecución del veredicto en espera de que concluyeran los otros juicios contra el menor de edad C. Este no estuvo presente en el tribunal para conocer el veredicto porque no se le permitió asistir. El tribunal absolvió al menor de edad C de la acusación relativa a la bomba falsa en Sitra. El Gobierno terminó retirando la acusación de arrojar una bomba falsa en la localidad de Al-Daih.

23. El 4 de marzo de 2019 las autoridades llevaron a juicio al menor de edad C y a otras personas en el marco de una vista relativa a la causa de los disturbios. Al término de la vista, todos ellos volvieron a Dry Dock, mientras que las autoridades llevaron al menor de edad C a la Dirección de Investigación Judicial sin informar de ello a su familia. El 6 de marzo de 2019 uno de los coacusados en la causa de los disturbios llamó a la familia del menor de edad C y le informó de que la administración de Dry Dock le había presentado un documento para que lo firmara; en él figuraban detalles sobre una pena de prisión de un año con suspensión de la ejecución para él y el menor de edad C. La familia no había recibido información sobre el paradero del menor de edad C, su condena o estos posibles criterios de oportunidad.

24. La fuente informa de que el 9 de marzo de 2019 el menor de edad C llamó a su familia y le informó de que se encontraba en la Dirección de Investigación Judicial. El 11 de marzo de 2019 el menor volvió a llamar a su familia para decirle que las autoridades lo habían trasladado a la sección para condenados de Dry Dock a fin de que cumpliera la anterior condena de seis meses, pese a la suspensión de la ejecución concedida el 13 de febrero de 2019. Presuntamente se había procedido al traslado porque los progenitores del menor de edad C no habían abonado fianza. Sin embargo, sus progenitores no habían recibido notificación alguna de que debieran abonar fianza. El padre del menor de edad C fue junto con un abogado a abonar la fianza de 200 dinares para que el menor pudiera volver a casa. Las autoridades no lo pusieron en libertad, pese a que el abogado confirmó que no había otros cargos pendientes que justificaran la reclusión.

25. El 13 de marzo de 2019 un tribunal condenó al menor de edad C a seis meses de prisión por cargos de participación en una reunión ilegal y en disturbios. El 21 de marzo de 2019, sin informar al abogado del menor, los funcionarios lo trasladaron al tribunal, donde se le informó de tres cargos nuevos: recibir formación en manejo de armas en Bahrein y fuera de Bahrein, participar en disturbios en Diraz en agosto de 2018 y arrojar cócteles molotov y participar en un incendio intencionado en Bani Jamra en septiembre de 2018. El menor de edad C niega todos los cargos. Permanece recluso en Dry Dock.

## Menor de edad D

26. El menor de edad D es un varón de 17 años de edad. En agosto de 2018 agentes de paisano llegados en vehículos civiles detuvieron al menor de edad D junto con un amigo suyo en Ciudad A'ali sin presentar una orden judicial ni explicar los motivos de la detención. El menor de edad D tenía entonces 16 años. En una fecha posterior se detuvo a sus otros amigos. Varios meses antes de la detención del menor de edad D, fuerzas civiles lo persiguieron y golpearon, y el menor de edad D se sentía vigilado.

27. La fuente informa de que inmediatamente después de la detención del menor de edad D este fue llevado por agentes a la comisaría de policía de Ciudad Hamad. Un amigo del menor de edad D informó a su familia de su detención. Agentes de policía interrogaron al menor y lo amenazaron con golpearlo si no confesaba. El menor de edad D confesó por miedo, primero en la comisaría y después en la Fiscalía, adonde fue llevado. Posteriormente fue trasladado a Dry Dock.

28. Según la fuente, en un principio se acusó al menor de edad D de haber participado en una reunión ilegal. Al término de los juicios celebrados contra ellos, sus amigos presentaron confesiones en su contra. El menor de edad D sostiene que no tuvo nada que ver con esos actos. Posteriormente fue acusado de quemar un jardín, adherirse a un grupo terrorista y participar en una reunión ilegal y en disturbios. Los progenitores del menor de edad D supieron de las acusaciones cuando su abogado asistió a las primeras vistas judiciales.

29. La fuente informa de que el tribunal asignó un abogado al menor de edad D en vista de que su familia carecía de medios financieros. Sin embargo, su familia contrató a un abogado privado al ver que el abogado asignado por el tribunal no se comunicaba con ella.

30. El 13 de diciembre de 2018 se condenó al menor de edad D a tres años de prisión y al pago de una multa de 100.000 dinares por participación en una reunión ilegal y en disturbios. El 29 de enero de 2019 el abogado del menor de edad D presentó un recurso. El 25 de marzo de 2019 el tribunal de apelación confirmó la condena. Se condenó al menor a un año de prisión por quemar un jardín. El 28 de enero de 2019 se ratificó la sentencia. Por último, se condenó al menor de edad D a tres años de prisión por adhesión a un grupo terrorista, pena ratificada en apelación el 25 de marzo de 2019.

31. Según la fuente, no se concedió al menor de edad D el tiempo y los recursos que necesitaba para prepararse para el juicio, pues su familia no se hizo con los servicios de un abogado hasta pasados varios días desde el comienzo de sus juicios. Además, no se le permitió reunirse con su abogado fuera de la sala de la audiencia. Tras su traslado a Dry Dock, se reunió por primera vez con su familia. Permanece recluso en Dry Dock.

## Menor de edad E

32. El menor de edad E es un varón de 14 años de edad. En el momento en que tuvieron lugar los presuntos hechos, era un estudiante de 13 años. El 14 de febrero de 2019 agentes armados vestidos con ropa de civil detuvieron al menor de edad E en la aldea de Al-Musalla mientras tenía lugar en las inmediaciones una manifestación. La fuente alega que los agentes lo golpearon y le gritaron, tras lo cual lo detuvieron sin orden judicial y sin explicar los motivos de la detención. Los agentes detuvieron al menor de edad E junto con un amigo suyo, el menor de edad F, cuando ambos negaron conocer el paradero de personas perseguidas por los agentes.

33. La fuente informa de que, tras la detención del menor de edad E, su familia fue a la comisaría de policía de Al-Khamis, donde se le dijo que el detenido no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, después de esperar se les dijo que aguardaba a ser interrogado. Durante el interrogatorio del menor no estuvieron presentes ni un abogado ni un progenitor. Permaneció seis horas detenido, tras lo cual fue puesto en libertad a condición de volver a la comisaría al cabo de dos días para comparecer ante la Fiscalía. El 16 de febrero de 2019 el menor de edad E volvió y permaneció recluso cinco días en espera de que se emprendieran investigaciones. Fue trasladado al Centro de Menores de Ciudad Isa.

34. Según la fuente, el menor de edad E no contó con la presencia de un abogado mientras permaneció recluso en la comisaría de policía. Sin embargo, se envió en su

representación a un abogado que ahora representa a los dos menores de edad E y F. Los agentes afirmaron que pondrían en libertad al menor de edad E si confesaba ante la Fiscalía haber participado en una reunión ilegal. El menor de edad E dijo a los agentes que estaba jugando en la calle cuando fue detenido. Su declaración no contenía información incriminatoria.

35. El 17 de febrero de 2019 se permitió a la familia del menor de edad E visitarlo 15 minutos en el Centro de Menores en atención a una solicitud especial. Fue acusado de haber participado en una reunión ilegal. El 20 de febrero de 2019 la Fiscalía prorrogó otra semana el plazo de reclusión, tras lo cual el 27 de febrero de 2019 volvió a prorrogarlo cuatro días más. El 3 de marzo de 2019 se puso en libertad a los menores de edad E y F en espera de que se celebrara el juicio. El 17 de marzo de 2019 se celebró una vista judicial.

#### Menor de edad F

36. El menor de edad F es un varón de 14 años de edad. El 14 de febrero de 2019 los menores de edad E y F se encontraban jugando en la calle cuando fueron detenidos por agentes armados vestidos con ropa de civil. Los agentes, que perseguían a otras personas, exigieron a los menores de edad que les informaran del paradero de estas. Cuando los menores de edad dijeron que no las conocían, los agentes les gritaron y los golpearon. El menor de edad F tenía entonces 14 años.

37. Los agentes llevaron al menor de edad F a la comisaría de policía de Al-Khamis, donde permaneció recluso seis horas sin abogado. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza a condición de volver al cabo de dos días para comparecer ante la Fiscalía. La fuente sostiene que los agentes de policía querían que el menor de edad F confesara su participación en una reunión ilegal antes de ponerlo en libertad, pero no confesó.

38. El 16 de febrero de 2019 el menor de edad F compareció ante la Fiscalía con un abogado y prestó declaración. El abogado dijo a los progenitores del menor que su declaración no era incriminatoria. Sin embargo, en contra de las expectativas del abogado, la Fiscalía lo mantuvo recluso cinco días en espera de que se emprendieran investigaciones. El 20 de febrero de 2019 la Fiscalía prorrogó otra semana la detención del menor de edad F, prorrogada de nuevo otros cuatro días el 27 de febrero de 2019. El 3 de marzo de 2019 la Fiscalía puso en libertad al menor de edad F a condición de que compareciera en una vista el 17 de marzo de 2019.

#### Menor de edad G

39. El menor de edad G es un varón de 18 años de edad. En el momento de su detención, tenía 15 años. El 20 de febrero de 2017 a las 4.00 horas seis agentes enmascarados vestidos de paisano irrumpieron en el domicilio familiar del menor de edad G mientras dormía. Registraron la casa en busca de armas y explosivos. La fuente alega que los agentes detuvieron al menor de edad G sin presentar una orden judicial. Mientras viajaba en el vehículo camino de la comisaría de policía de Al-Maaid los agentes lo golpearon, le rasgaron la ropa y le apuntaron con una pistola a la cabeza mientras le amenazaban con matarlo. En la comisaría los agentes de policía lo interrogaron, lo sometieron a palizas fuertes, le vertieron encima agua muy caliente y muy fría y amenazaron con someterles, a él o a sus familiares, a agresiones sexuales si no confesaba. Los agentes siguieron irrumpiendo otras tres noches en el domicilio familiar, pero no encontraron pruebas en relación con las acusaciones. El padre del menor de edad G había sido condenado antes a 15 años de prisión y privado de la nacionalidad por motivos políticos.

40. La fuente informa de que el menor de edad G estuvo desaparecido seis días. El 26 de febrero de 2017 su familia recibió una llamada de Dry Dock en la que se le pedía que llevara ropa para el menor de edad G. Durante su desaparición unos agentes lo habían trasladado entre diversas ubicaciones donde había sido objeto de formas graves de tortura. Al poco de su detención la salud mental del menor de edad G se deterioró, y sufrió convulsiones y fiebre. Fue trasladado al hospital de Salmaniya sin el conocimiento de su familia.

41. El 26 de febrero de 2017 el menor de edad G fue llevado ante un tribunal penal inferior para ser juzgado por haber participado en disturbios y en una reunión ilegal. Fue condenado a un año de libertad condicional. Se le denegó el acceso a su abogado, que solo se reunió con él durante el juicio. Sin embargo, no fue puesto en libertad, pues permaneció recluso hasta que se celebraran los juicios correspondientes a otros tres cargos de participación en disturbios y en una reunión ilegal.

42. El 26 de febrero de 2017 se trasladó al menor de edad G a la cárcel de Jau con fines de obtención de información biométrica. La fuente alega que agentes de la policía antidisturbios lo colgaron por las piernas, le afeitaron la cabeza, lo golpearon y le dieron patadas. El menor de edad G, sintiéndose próximo a la muerte, se desmayó. Fue trasladado al hospital de Al Qalaa, donde se le suministró un anticoagulante, tras lo cual fue devuelto a Dry Dock. El menor empezó a sentir dolor de espalda como consecuencia de la tortura. El 16 de abril de 2017 su familia presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior, pero no recibió respuesta.

43. El 21 de marzo de 2017 un tribunal penal inferior condenó al menor de edad G a seis meses de prisión en relación con otros tres casos de participación en disturbios y en una reunión ilegal. El 7 de diciembre de 2017 el tribunal penal inferior condenó al menor a otro año de prisión por participación en disturbios y en una reunión ilegal. El 30 de enero de 2018 se ratificó la condena en apelación.

44. La fuente informa de que en Dry Dock el menor de edad G presentaba síntomas como fiebre, agotamiento, dolor de espalda grave y convulsiones, pues padecía deficiencia de hierro y talasemia. El menor de edad G pidió muchas veces ser trasladado a la clínica de la prisión, pero se denegaron sus solicitudes hasta que su familia presentó una queja ante la administración penitenciaria. Cuando el menor de edad G fue llevado a la clínica, no se le dispensó tratamiento. Posteriormente, enfermó gravemente y fue llevado a la clínica, de donde llamaron a su madre, que trajo pastillas y vitaminas.

45. El personal penitenciario sigue tratando con rigor al menor de edad G, pues sabe que su padre también se encuentra recluso en la cárcel de Jau. Durante mucho tiempo se denegó al menor de edad G el contacto con su madre. Su familia ha solicitado repetidas veces permiso para que se ponga en contacto con su padre. A fines de 2018 el menor de edad G y su padre se declararon en huelga de hambre para protestar contra el hecho de que llevaban más de un año sin poder ponerse en contacto el uno con el otro, a pesar de que las autoridades habían prometido que lo iban a permitir. El menor de edad G sigue sometido a humillaciones. Su familia es objeto de registros invasivos durante sus visitas.

#### Menor de edad H

46. El menor de edad H es un varón de 18 años de edad. En el momento de su detención, era un estudiante de 16 años. Es oriundo de Budaia, donde reside con su familia. A aproximadamente las 6.00 horas del 22 de julio de 2017 fuerzas de seguridad rodearon el domicilio familiar. La fuente sostiene que, a pesar de las objeciones de la familia, las fuerzas de seguridad entraron en el domicilio y lo registraron. Los agentes llevaban ropas de paisano y estaban enmascarados, aunque uno llevaba una chaqueta donde se veía el emblema del Ministerio del Interior. Cuando terminaron el registro, exigieron al menor de edad H que les facilitara su tarjeta de identidad y se lo llevaron en un vehículo civil sin distintivos. No presentaron ninguna orden de detención ni explicaron los motivos de la detención.

47. El menor de edad H fue llevado a la comisaría de policía del norte de Ciudad Hamad, donde permaneció hasta su traslado a Dry Dock a fines de julio de 2017. Ni su familia ni su asesor jurídico recibieron documentación oficial en la que se explicaran los motivos de la detención. La fuente alega que se obligó a personas que habían sido detenidas antes a identificar al menor de edad H como integrante de un grupo que había atacado un vehículo de policía. Con respecto a esa alegación ya se había detenido a tres personas puestas en libertad posteriormente después de que hubieran identificado al menor de edad H y a otras personas como responsables del ataque. Se trasladó a uno de los detenidos puestos en libertad a un hospital para dispensarle tratamiento por lesiones derivadas de la tortura.

48. Desde su detención, se ha impedido que el menor de edad H hable con su familia y se le ha denegado el acceso a asistencia letrada. Presuntamente se encuentra recluido en régimen de aislamiento.

49. El 30 de julio de 2017 el menor de edad H fue llevado ante la Fiscalía sin que se informara de ello a su abogado. La Fiscalía ordenó la reclusión del menor de edad H durante 30 días mientras se emprendía una investigación, si bien no se informó de la investigación a su familia ni a su abogado. La duración de su reclusión en régimen de prisión preventiva da a entender que el menor tal vez haya sido acusado de delitos relacionados con la seguridad nacional o el terrorismo.

50. El 30 de julio de 2017 el menor de edad H llamó a su familia y le dijo que iba a ser trasladado a Dry Dock. Se trata de la única vez que se le ha permitido hablar con su familia desde su detención.

51. La fuente sostiene que se tienen pruebas convincentes de maltrato físico que constituye tortura. Se torturó al menor de edad H hasta que firmó una confesión. Su familia ha presentado ante el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior una queja que no ha tenido resultado.

52. El 2 de noviembre de 2017 se acusó al menor de edad H de atacar un vehículo de policía con un cóctel molotov y participar en una reunión ilegal. El 26 de febrero de 2018 fue condenado a tres años de prisión. El 24 de abril de 2018 se ratificó la condena en apelación. El abogado del menor de edad H no presentó recurso. El menor de edad H permanece recluido en Dry Dock.

53. La familia del menor de edad H ha sido objeto de un trato humillante, incluidos registros vejatorios durante las visitas familiares. El 25 de diciembre de 2018, durante una visita programada se impidió el acceso a un familiar porque iba vestido de negro al estar de luto por el fallecimiento de un pariente. Otro familiar objetó a ello y fue retirado. A continuación, la administración de la prisión puso al menor de edad H en régimen de aislamiento durante cinco días mientras presuntamente debía presentarse a unos exámenes. Se le denegaron otras dos visitas familiares.

#### Menor de edad I

54. El menor de edad I es un varón de 18 años de edad. En el momento de su detención, tenía 16 años. El 5 de octubre de 2017 agentes vestidos de paisano detuvieron sin orden judicial al menor de edad I cuando se dirigía a la escuela en Al Aali y lo llevaron a la Dirección de Investigación Judicial. El 6 de octubre de 2017 el menor informó a su familia de que se encontraba en la Dirección, pero no podía decir más. La fuente alega que, mientras permaneció en la Dirección, los agentes lo mantuvieron largas temporadas recluido en régimen de aislamiento.

55. El menor de edad I permaneció más de dos meses y medio en la Dirección de Investigación Judicial. Durante ese período lo interrogaron agentes sin la presencia de un asesor jurídico, al igual que lo torturaron para obtener confesiones. El menor de edad I firmó una confesión por la que admitía todas las acusaciones. Un examen forense corroboró las alegaciones de tortura. Las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizaron como pruebas contra el menor de edad I, y se emitió un veredicto en su contra.

56. El menor de edad I está acusado en otros siete casos. La asignación de abogados distintos en cada caso ha alargado el proceso. Además, no se ha permitido a los abogados del menor de edad I comunicarse con él. Ha sido condenado a 20 años de cárcel, se le ha privado de su nacionalidad y se le han impuesto multas por valor de más de 10.000 dinares. Sobre él pesan cargos de participación en reuniones políticas, en disturbios y en actos de terrorismo. Durante su juicio el menor de edad I no pudo ponerse en contacto con su abogado, y no se permitió a su familia asistir.

57. El 4 de enero de 2018 la familia presentó una queja ante el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior en relación con la tortura y los malos tratos sufridos por el menor de edad I durante los interrogatorios a los que había sido sometido mientras se encontraba recluido en la Dirección de Investigación Judicial. El 1 de marzo de 2018 se remitió el caso a la Unidad Especial de Investigación. La familia no ha recibido respuesta. Además, el juez



presuntamente hizo caso omiso de la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, así como de las pruebas procedentes del examen forense.

58. Mientras esperaba la resolución de su recurso de apelación, el menor de edad I fue llevado a asistir a vistas judiciales, pero se le impidió bajar del autobús o entrar en la sala. Como consecuencia de ello, las vistas se celebraron en rebeldía, los fallos confirmaron las resoluciones del tribunal inferior y se sucedieron los retrasos. El 9 de octubre de 2018 se condenó al menor de edad I a otros tres meses de prisión y a una nueva multa de 200 dinares.

59. Los días 5 de junio, 29 de octubre y 30 de octubre de 2018, se ratificaron en apelación las condenas dictadas en siete casos contra el menor de edad I. El Tribunal de Casación todavía no ha fijado una fecha en relación con su desnacionalización. Está pendiente de celebración un juicio contra él por adhesión a “Bahraini Hizbullah” en el marco del cual se procesa a 169 personas. Permanece recluso en Dry Dock.

#### Contexto

60. Los nueve menores de edad son varones que tenían de 13 a 16 años de edad cuando fueron detenidos. Todas las detenciones se realizaron sin orden judicial, y la mayor parte estuvieron acompañadas de un registro o allanamiento sin orden judicial. Por lo menos cinco de los menores afirman haber sido sometidos a tortura con fines de obtención de una confesión, y todos afirman que se les impidió reunirse con su asesor jurídico o que fueron sometidos a otro tipo de juicio injusto.

#### Análisis

61. La fuente sostiene que los nueve casos obedecen a una pauta de detención sin orden judicial, tortura y malos tratos, confesiones obtenidas mediante coacción y juicios injustos de menores de edad bahreiníes. También ejemplifican el uso de leyes contra el terrorismo y de leyes dirigidas contra los derechos a las libertades de expresión y de reunión pacífica a fin de imponer condenas. El Gobierno ha incumplido las obligaciones que le corresponden de conformidad con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La fuente afirma que la detención de los nueve menores de edad es arbitraria y se inscribe en las categorías II y III.

#### Respuesta del Gobierno

62. El 10 de julio de 2019, mediante su procedimiento ordinario de comunicaciones, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno y le pidió que, antes del 9 de septiembre de 2019, proporcionara información detallada acerca de la situación de los nueve menores de edad. El Gobierno respondió el 6 de septiembre de 2019.

63. El menor de edad A tomó parte en tres incidentes de ataques dirigidos contra patrullas de policía. Fue acusado de participación en disturbios y en una reunión ilegal y de posesión de cócteles molotov. Un juez revisó su detención en cinco ocasiones en noviembre y diciembre de 2018. El 6 de enero de 2019 el tribunal dictaminó en presencia del menor de edad A que debía permanecer recluso en el Centro de Menores, y que cada seis meses debían presentarse informes sobre su caso. La Unidad Especial de Investigación no recibió quejas en relación con el menor de edad A, que no presentaba problemas de salud excepto una discapacidad en la infancia respecto de una pierna. Ha acudido a 14 citas médicas. Se ha permitido al menor de edad A recibir visitas de familiares y llamarlos. Está matriculado en la escuela del Centro. En julio de 2019 se prorrogó su reclusión.

64. El menor de edad B formaba parte de un grupo que participaba en disturbios, llevaba a cabo actos de vandalismo y agredía a agentes de policía en Sitra. Fue acusado de adhesión a un grupo terrorista, participación en una reunión ilegal y en disturbios y posesión y adquisición de cócteles molotov. El tribunal condenó al menor de edad B a siete años de prisión, le revocó la nacionalidad y le impuso una multa de 200 dinares. La Unidad Especial de Investigación no recibió denuncias en relación con el menor de edad B. Fue objeto de reconocimiento médico en julio de 2019. En 2019 recibió 14 visitas de familiares.

65. El menor de edad C tomó parte en cuatro reuniones ilegales en Diraz y Bani Jamra en el curso de las cuales se dirigieron ataques contra patrullas de seguridad. Fue acusado de participación en disturbios y en una reunión ilegal y de posesión de cócteles molotov y se le impuso una condena, que se suspendió, de seis meses de prisión, así como una multa de 200 dinares. Posteriormente fue condenado a otros seis meses de prisión por cargos semejantes. También fue condenado a tres años de prisión por participar en disturbios y en una reunión ilegal, poseer cócteles molotov y provocar un incendio intencionado. El caso está pendiente de recurso. La Unidad Especial de Investigación no recibió quejas en relación con el menor de edad C. Sin embargo, el 30 de junio de 2019 otro recluso presentó una queja en el sentido de que él y el menor de edad C habían sido golpeados en Dry Dock. La Unidad ordenó realizar un examen forense a raíz del cual no se observaron lesiones, pero la queja se sigue investigando. El 31 de julio de 2019 el menor de edad C fue objeto de un reconocimiento médico por el que se constató que padecía anemia drepanocítica, en relación con lo cual se le dispensó tratamiento. En 2019 recibió nueve visitas de familiares.

66. El menor de edad D tomó parte en 2018 en ataques dirigidos contra fuerzas del orden en Buri. Fue condenado a tres años de prisión por provocar incendios con fines terroristas, participar en una reunión ilegal y en disturbios y adquirir material inflamable. Fue condenado en rebeldía por otros cargos de participación en una reunión ilegal y en disturbios, a raíz de lo cual se le impuso una multa de 200 dinares y se decretó una suspensión de la ejecución durante tres años. También se acusó al menor de edad D de financiación del terrorismo, participación en disturbios y en reuniones ilegales, adquisición de cócteles molotov, provocación de un incendio intencionado y actos de destrucción con fines terroristas, por lo cual fue condenado a otros tres años de cárcel y se le impuso una multa de 100.000 dinares. El fallo fue ratificado en apelación. Se condenó al menor de edad D a un año de cárcel por causar un incendio en Buri. La Unidad Especial de Investigación no recibió quejas en relación con el menor de edad D, que el 31 de julio fue objeto de un reconocimiento médico a raíz del cual no se detectaron problemas de salud graves. En 2019 recibió 12 visitas de familiares.

67. Se acusó a los menores de edad E y F de participar en una reunión ilegal y en disturbios, así como en una manifestación no autorizada en Al-Musalla. El tribunal de menores prorrogó su reclusión los días 20 y 27 de febrero de 2019. Se impuso a ambos libertad condicional por un período de un año durante el cual debían presentarse informes semestrales sobre sus casos. La Unidad Especial de Investigación no recibió quejas en relación con ninguno de los dos. Ambos menores de edad se encontraban recluidos en el Centro de Menores, pero fueron puestos en libertad en marzo de 2019.

68. El menor de edad G participó en 2017 en manifestaciones no autorizadas durante las cuales atacó a patrullas de mantenimiento del orden. Fue condenado a dos meses de prisión por participar en una reunión ilegal y a un año de prisión por participar en una reunión ilegal y en disturbios y por poseer cócteles molotov. Se le impusieron otras sentencias de un año de libertad condicional por colocar explosivos falsos en Ciudad Al-Daih en agosto de 2016; un año de prisión por participar en una reunión ilegal y en disturbios y poseer cócteles molotov; dos meses de prisión por quemar residuos junto a una mezquita; y dos meses de prisión por participar en una reunión ilegal en Sanabis. El 29 de mayo de 2017 la Unidad Especial de Investigación recibió una queja en relación con una paliza propinada al menor de edad G por la policía para extraer una confesión. Se ordenó practicar un examen forense, pero el menor de edad G se negó a ser examinado. No se detectaron lesiones y no había más pruebas. El 31 de julio de 2019 el menor de edad G fue objeto de un reconocimiento médico por el que se constató que padecía anemia drepanocítica, en relación con lo cual se le dispensó tratamiento. En 2017 recibió 19 visitas de familiares, en 2018 recibió 23 (incluida una en compañía de su padre) y en 2019 recibió 13. Durante las visitas se siguieron los procedimientos aplicables, en particular registros de las visitantes llevados a cabo por mujeres policía.

69. El menor de edad H prendió fuego a un vehículo de policía en Bani Jamra en julio de 2017. Fue acusado de incendio con fines terroristas, participación en una reunión ilegal y en disturbios y posesión y adquisición de cócteles molotov. Fue condenado, estando él presente, a tres años de prisión y al pago de 1.191 dinares por los daños causados al vehículo. El 10 de septiembre de 2017 la Unidad Especial de Investigación recibió una

queja presentada por el abogado del menor de edad H en el sentido de que este había sido sometido a tortura para extraer una confesión mediante coacción. El menor de edad H se negó a someterse a un examen forense y no había más pruebas. El menor de edad H fue objeto de reconocimiento médico el 31 de julio de 2019. En 2018 recibió 19 visitas de familiares, mientras que en 2019 recibió 13. Durante esas visitas se siguieron los procedimientos aplicables en materia de registro.

70. El menor de edad I tomó parte en incidentes en 2016 y 2017 en Ciudad A'ali y Buri. Se le impusieron condenas de tres años de prisión por colocar bombas con fines terroristas; de tres años de prisión por detener a una persona y privarla de libertad, hacer uso de la fuerza y secuestrarla; y de tres meses de prisión (suspendidos por tres años) y una multa de 200 dinares por participar en una reunión ilegal y poseer botellas con material incendiario. También se condenó al menor de edad I a dos años de prisión por dos incidentes distintos de colocación de artefactos explosivos en lugares públicos; a tres años de prisión por adherirse a un grupo terrorista, recibir formación en uso de armas, fabricar materiales explosivos y poseer un arma de fuego; a un año de prisión por colocar artefactos explosivos; y a un año de prisión por provocar una explosión. Por último, se condenó al menor de edad I a un año de libertad condicional por participar en una reunión ilegal. El 1 de marzo de 2018 la Unidad Especial de Investigación recibió una queja en relación con una presunta paliza propinada al menor de edad I por la policía para extraer una confesión. Se llevaron a cabo exámenes forenses, pero no se detectaron lesiones y no había más pruebas. El menor de edad I fue objeto de reconocimiento médico el 31 de julio de 2019. En 2018 recibió 17 visitas de familiares, mientras que en 2019 recibió 11.

71. El Gobierno niega todas las alegaciones de la fuente y observa que un poder judicial independiente juzgó ante tribunales de menores a los menores de edad por cometer actos penales previstos en el derecho de Bahrein, actuaciones que respetaron todas las garantías. Se recluyó a los menores de edad en establecimientos de menores designados como tales.

#### *Comentarios adicionales de la fuente*

72. El Gobierno no respondió a varias alegaciones relativas a la falta de acceso a asistencia letrada y a la falta de seguimiento de los debidos procedimientos judiciales. El 3 de marzo de 2019 se puso en libertad a los menores de edad E y F en espera de que se celebraran juicios, pero posteriormente, el 14 de abril de 2019, fueron declarados culpables y condenados a un año de libertad condicional.

#### **Deliberaciones**

73. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información suministrada.

74. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la puesta en libertad de los menores de edad E y F. De conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, no obstante la puesta en libertad de las personas en cuestión, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad. Los dos menores de edad puestos en libertad presuntamente fueron objeto de graves violaciones de los derechos humanos, en particular interrogatorios sin que estuvieran presentes sus padres o tutores o un abogado. El Grupo de Trabajo considera que es importante emitir una opinión sobre sus casos, así como sobre los casos de los demás menores de edad, que siguen recluidos.

75. Para determinar si la privación de libertad de los nueve menores de edad es arbitraria, el Grupo de Trabajo se atiene a los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

#### **Categoría I**

76. La fuente alega que los nueve menores de edad fueron detenidos sin orden judicial y sin ser informados de los motivos de su detención. El Gobierno no respondió a esas

alegaciones. A falta de refutación, el Grupo de Trabajo considera que la información proporcionada por la fuente es creíble. El Grupo de Trabajo ha constatado en casos recientes relativos a Bahrein que no se presentaba una orden de detención ni se explicaban los motivos de la detención, lo cual es indicio de que el incumplimiento de los procedimientos de detención es un problema sistémico<sup>1</sup>.

77. De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en esta. El artículo 9, párrafo 2, establece que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma. En el presente caso, los menores de edad fueron detenidos sin orden judicial, en violación del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Para que la privación de libertad tenga una base legal, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención<sup>2</sup>. No se informó a los menores de edad de las razones de su detención, lo que contraviene el artículo 9, párrafo 2, del Pacto. Una detención será arbitraria cuando se realice sin informar al detenido de las correspondientes razones<sup>3</sup>. Como ha afirmado el Comité de Derechos Humanos, cuando se detenga a un niño deberán ser notificados también directamente sus padres o representantes legales, procedimiento que no se observó en relación con estos menores de edad<sup>4</sup>.

78. Además, la fuente alega que, cuando se detuvo a algunos de los menores de edad, se registró su domicilio sin mediar orden judicial (menores B, G y H). El Gobierno no respondió a esa alegación. No queda claro si durante los registros se procedió a la incautación de pruebas ni si las pruebas incautadas se utilizaron en las actuaciones judiciales contra los menores de edad. El Grupo de Trabajo ha determinado que una detención es arbitraria cuando se han utilizado en actuaciones judiciales pruebas obtenidas sin orden de allanamiento<sup>5</sup>. El hecho de que se registraran sin ese tipo de orden algunos de los domicilios de los menores de edad añade peso a la conclusión de que las autoridades no se guiaron por procedimientos de investigación a efectos de velar por que la detención de los menores tuviera fundamento jurídico.

79. La fuente sostiene que no se notificaron con prontitud al menor de edad B los cargos que se le imputaban. Las autoridades acusaron de espionaje al menor de edad B. Sin embargo, los interrogadores nunca informaron al menor de edad B de esa acusación, como tampoco lo interrogaron al respecto. El menor de edad B solo supo de la acusación por medio de sus progenitores, a quienes había informado el abogado. Ello constituye una violación del derecho a ser notificado sin demora de los cargos presentados en virtud del artículo 9, párrafo 2, del Pacto y el artículo 40, párrafo 2 b) ii), de la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>6</sup>. No basta con haber informado al abogado y a la familia del menor de edad B de los cargos: conforme al artículo 40, párrafo 2 b) ii), debe informarse al niño detenido “sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él” y, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales.

80. Además, parece que algunos de los menores de edad no fueron llevados sin demora ante un juez. Según indica la fuente, el menor de edad A permaneció recluido en régimen de incomunicación tres días después de su detención<sup>7</sup>. El menor de edad B permaneció 35 días recluido en la cárcel de Jau, donde fue sometido a interrogatorios tras su detención. Tras su primera y su segunda detención, el menor de edad C permaneció recluido en la Dirección de Investigación Judicial 21 días y 20 días, respectivamente. La Fiscalía prorrogó

<sup>1</sup> Opiniones núms. 31/2019, 79/2018, 51/2018, 55/2016 y 41/2015.

<sup>2</sup> Opiniones núms. 46/2019, 33/2019, 9/2019, 46/2018, 36/2018, 10/2018 y 38/2013.

<sup>3</sup> Opiniones núms. 10/2015, párr. 34, y 46/2019, párr. 51.

<sup>4</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), sobre la libertad y la seguridad personales, párr. 28, y opinión núm. 73/2018, párr. 48.

<sup>5</sup> Opiniones núms. 33/2019, 31/2019, 83/2018, 78/2018 y 36/2018.

<sup>6</sup> Véase también la regla 7.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

<sup>7</sup> La reclusión de personas en régimen de incomunicación vulnera su derecho a impugnar la legalidad de su privación de libertad de conformidad con el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Véanse también las opiniones núms. 46/2017 y 45/2017.

16 días la detención de los menores de edad E y F. El menor de edad G estuvo seis días desaparecido. El 22 de julio de 2017 se detuvo al menor de edad H, que permaneció recluido en una comisaría de policía hasta fin de mes. El menor de edad I permaneció más de dos meses y medio en la Dirección de Investigación Judicial. Los menores de edad fueron llevados ante la Fiscalía, y no ante un tribunal, cuando se prorrogó su reclusión<sup>8</sup>.

81. El Gobierno afirma que, tras el ingreso en el Centro de Menores del menor de edad A el 13 de noviembre de 2018, un juez del tribunal de menores revisó su privación de libertad el 19 de noviembre de 2018. Además, se detuvo a los menores de edad E y F el 16 de febrero de 2019, y el tribunal de menores prorrogó su detención el 20 de febrero de 2019. El Gobierno no aportó otra información en relación con el examen de la detención de cada uno de ellos.

82. Conforme al artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que debe aplicarse a los menores de edad un plazo estricto en el sentido de que deben ser llevados ante un tribunal antes de que transcurran 24 horas desde su detención<sup>9</sup>. El Comité de los Derechos del Niño ha confirmado que es semejante el requisito impuesto por el artículo 37 d) de la Convención sobre los Derechos del Niño y que todo niño privado de libertad deberá ser llevado ante una autoridad competente en un plazo de 24 horas para examinar la legalidad de la privación de libertad o su prórroga<sup>10</sup>. Queda claro que, en el presente caso, no se cumplió el plazo en relación con los menores de edad. Es esencial que los niños detenidos tengan acceso rápido y efectivo a un proceso independiente adaptado a sus necesidades para determinar el fundamento jurídico de su detención y para recibir sin demora recursos apropiados y accesibles<sup>11</sup>. Al faltar ese acceso, se denegó a los menores de edad un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

83. Por último, el Grupo de Trabajo considera que existen dudas en cuanto al fundamento jurídico de la privación de libertad de los menores de edad E y F. Según la fuente, los agentes detuvieron a los dos menores de edad mientras jugaban en la calle porque negaron tener conocimiento del paradero de otras personas. Pese a que los agentes presuntamente les propinaron una paliza, ambos menores de edad se negaron a confesar que habían participado en una reunión ilegal. El Gobierno sostiene que habían participado en una manifestación no autorizada y los acusó de participación en una reunión ilegal sin ofrecer mayores explicaciones sobre la manera en que su conducta se ajustaba a los elementos de tal acusación.

84. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la detención y la reclusión de los nueve menores de edad. Su privación de libertad se inscribe en la categoría I.

## Categoría II

85. Según la fuente, se enjuició a los nueve menores de edad de conformidad con leyes dirigidas contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

86. Sin embargo, las comunicaciones de la fuente se centran en las presuntas infracciones de procedimiento con respecto al derecho de los menores a un juicio imparcial. La fuente no aportó suficiente información en apoyo de su argumento respecto de la

<sup>8</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 32, y opinión núm. 14/2015, párr. 28.

<sup>9</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 33, y opinión núm. 14/2015, párr. 29.

<sup>10</sup> Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 24 (2019), sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, párr. 90.

<sup>11</sup> Véanse el principio 18 y la directriz 18 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo).

categoría II, en particular por lo que se refiere a la ubicación y el contexto en que los menores de edad ejercían sus derechos cuando fueron privados de libertad, las actividades en que tomaban parte en ese momento y las correspondientes motivaciones. El Gobierno sostiene que los menores de edad tomaban parte en reuniones ilegales en el marco de las cuales cometieron actos de violencia y que no estaban ejerciendo sus derechos.

87. El Grupo de Trabajo considera que la fuente no ha presentado indicios razonables de privación de libertad conforme a la categoría II.

### Categoría III

88. La fuente alega que ocho de los nueve menores de edad fueron objeto de tortura y malos tratos, en algunos casos para obtener confesiones mediante coacción. Esos presuntos tratos comprendían obligar al recluso a permanecer de pie por períodos prolongados, rociarlo con gas pimienta y pisotearle la cara (menor de edad B); vendar los ojos al recluso, privarle de alimentos y agua y meterle zapatos en la boca (menor de edad C); amenazar al recluso con propinarle una paliza (menor de edad D); propinar palizas (menores de edad E y F); apuntar al recluso a la cabeza con una pistola, amenazarlo con someterlo a agresiones sexuales, colgarlo por las piernas y verterle en el cuerpo agua muy caliente y muy fría (menor de edad G); infligir abusos físicos al recluso (menor de edad H); y mantener al recluso largas temporadas en régimen de aislamiento (menor de edad I).

89. El Gobierno responde a las alegaciones de tortura informando de si se habían presentado quejas ante la Unidad Especial de Investigación y, en caso afirmativo, si gracias a las ulteriores investigaciones se habían reunido pruebas suficientes que fundamentaran las quejas. La información aportada por el Gobierno no supone una respuesta a las alegaciones de la fuente en el sentido de que el hecho de no haber presentado una queja a la Unidad no equivale a ausencia de tortura. Gran parte de los malos tratos alegados no habrían dejado señales físicas<sup>12</sup>, especialmente en vista de que los reconocimientos médicos se llevaron a cabo transcurrido un tiempo considerable desde que se cometió el presunto acto de violencia. Los reconocimientos de los menores de edad dejaron sin cumplir los requisitos previstos en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), conforme a los cuales debe presentarse una descripción de los malos tratos, así como una evaluación del estado psicológico de la víctima<sup>13</sup>.

90. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que ocho de los menores de edad fueron objeto de tortura y malos tratos<sup>14</sup>. Parece que este comportamiento viola la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa del derecho internacional, así como el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto, el artículo 37 a) y c) de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El uso de la fuerza física o psicológica contra un niño supone un abuso de poder de suma gravedad que está totalmente desprovisto de necesidad y proporcionalidad<sup>15</sup>. Los actos de tortura y malos tratos de niños presuntamente cometidos en el presente caso deben ser objeto de una investigación exhaustiva e independiente que vaya más allá de las indagaciones mencionadas por el Gobierno.

91. Además, la fuente alega que por lo menos cinco menores de edad (B, D, G, H y I) confesaron como consecuencia de tortura o malos tratos. En por lo menos dos casos se hizo uso de confesiones para condenar a menores de edad (B<sup>16</sup> e I). El Gobierno reconoce las alegaciones de que se obligó a confesar a algunos de los menores de edad, si bien llega a la conclusión de que las investigaciones no resultaron en pruebas. El Grupo de Trabajo

<sup>12</sup> Opinión núm. 53/2018, párr. 76, y Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, párr. 161.

<sup>13</sup> Protocolo de Estambul, párrs. 83 b) y c) y 104.

<sup>14</sup> CAT/C/BHR/CO/2-3, párr. 8.

<sup>15</sup> Opinión núm. 3/2017, párr. 30.

<sup>16</sup> La fuente alega que se condenó a los menores de edad B y H sobre la base de una confesión forzada realizada por un tercero, algo que no puede ser fundamento de una detención. Véanse las opiniones núms. 45/2019, párr. 69, y 75/2018, párr. 75.

considera que la admisión como prueba de una declaración presuntamente obtenida mediante tortura o malos tratos menoscaba la imparcialidad de todo el proceso<sup>17</sup>. Corresponde al Gobierno demostrar que los menores de edad declararon libremente<sup>18</sup>, pero no lo ha hecho. Los menores de edad carecían de acceso a abogados cuando realizaron las confesiones. Las confesiones obtenidas en ausencia de un abogado no son admisibles como prueba en un proceso penal<sup>19</sup>.

92. En consecuencia, se violó el derecho de los menores de edad a la presunción de inocencia previsto en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto y en el artículo 40, párrafo 2 b) i), de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como su derecho a no ser obligados a confesarse culpables con arreglo al artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto y el artículo 40, párrafo 2 b) iv), de la Convención sobre los Derechos del Niño. La imposición deliberada de presión para obtener una confesión viola los artículos 2, 13, 15 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes<sup>20</sup>.

93. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

94. Además, la fuente alega que los nueve menores de edad tuvieron restringido el acceso a asistencia letrada. Las presuntas restricciones fueron la ausencia de abogados durante los interrogatorios (menores de edad B, E e I); la comparecencia de menores de edad ante la Fiscalía sin abogado (menores de edad C y H); y el hecho de que los menores de edad solo pudieran consultar a un abogado durante el juicio y no desde el momento de su detención (menores de edad A, D y G). El Gobierno no respondió a esas alegaciones. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique la detención<sup>21</sup>. En el presente caso, no se otorgó a los menores de edad el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección (artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto) ni el derecho a presentar una defensa efectiva (artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto). También se violaron sus derechos de pronto acceso a asistencia jurídica (artículo 37 d) de la Convención sobre los Derechos del Niño) y de asistencia jurídica en la preparación de su defensa y audiencia equitativa en presencia de asistencia jurídica (artículo 40, párrafo 2 b) ii) y iii) de la Convención).

95. La fuente alega que las autoridades restringieron la capacidad de los menores de edad de ponerse en contacto con su familia, en particular impidiéndoles ponerse en contacto con su familia con posterioridad a su detención (menores de edad A, B, C, D, H e I), no informando a sus familiares de su detención o su traslado a otros establecimientos (menores de edad B, C, D, E y G), interrogándolos sin que estuviera presente un progenitor (menores de edad E y F), prosiguiendo el juicio e imponiendo sentencia sin que estuviera presente un progenitor (menores de edad A e I) y practicando registros invasivos durante las visitas de familiares (menores de edad G y H). El Gobierno indica el número de visitas de familiares que cada menor de edad ha recibido al año, pero no hace referencia a la presunta falta de contacto entre los menores de edad y su familia en anteriores fases de la detención (por ejemplo, durante los interrogatorios). El Gobierno también niega que se practicaran registros invasivos durante las visitas de familiares. Estas restricciones constituyen una contravención de los principios 15, 16, párrafo 1, y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y de

<sup>17</sup> Véanse las opiniones núms. 32/2019, párr. 43, 52/2018, párr. 79 i), 34/2015, párr. 28, y 43/2012, párr. 51.

<sup>18</sup> Observación general núm. 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 41.

<sup>19</sup> Opiniones núms. 14/2019, párr. 71, 1/2014, párr. 22, y 40/2012, párr. 48. Véanse también E/CN.4/2003/68, párr. 26 e), y Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 24, párr. 60.

<sup>20</sup> CAT/C/BHR/CO/2-3, párr. 16.

<sup>21</sup> Véanse el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. Véanse también la observación general núm. 24, párr. 95 e), del Comité de los Derechos del Niño y CRC/C/BHR/CO/4-6, párr. 44 b).

las reglas 7.1 y 10.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Las restricciones también contravienen los derechos de los menores de edad a mantener contacto con sus familiares (artículo 37 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño) y a que su causa se dirima en presencia de sus progenitores (artículo 40, párrafo 2 b) iii), de la Convención).

96. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota de las otras alegaciones de la fuente relativas al derecho a un juicio imparcial a las que el Gobierno no ha respondido. Se trata de referencias a detener a un menor de edad en régimen de incomunicación (menor de edad A)<sup>22</sup>, no permitir a un menor presentar pruebas o impugnar las pruebas presentadas contra él (menor de edad B), impedir a menores de edad asistir a las vistas de sus recursos (menores de edad B e I), celebrar algunas vistas judiciales en ausencia del menor (menor de edad C), detener a menores de edad en régimen de aislamiento (menores H e I)<sup>23</sup>, denegar las visitas de familiares como castigo (menor H)<sup>24</sup> y hacer caso omiso de pruebas de tortura (menor I). Estas prácticas han contribuido a la falta de imparcialidad del procedimiento contra los menores, en contravención del artículo 14, párrafos 1, 3 d) y e) y 5, del Pacto y del artículo 40, párrafo 2 b) iii) a v), de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

97. Las mencionadas vulneraciones del derecho a un juicio imparcial son de tal gravedad que otorgan a la detención de los nueve menores de edad un carácter arbitrario correspondiente a la categoría III.

#### Categoría V

98. La fuente alega que el presente caso revela un cuadro de detención y reclusión arbitrarias. Los nueve menores de edad que forman parte del caso son varones y tenían de 13 a 16 años de edad cuando fueron detenidos. Todos ellos informan de que fueron detenidos sin orden judicial, se impusieron restricciones a su capacidad de ponerse en contacto con su familia y de reunirse con asistencia letrada y fueron objeto de un juicio injusto. Las alegaciones se refieren a violaciones del derecho a la libertad, en particular detenciones en régimen de incomunicación (menor de edad A), desaparición forzada (menor de edad G) y régimen de aislamiento (menores de edad H e I). Además, presuntamente se sometió a los menores de edad a tortura y malos tratos (menores B, C, D, E, F, G, H e I) que en varios casos dieron lugar a confesiones forzadas (menores B, D, G, H e I). Se impusieron a los jóvenes penas de encarcelamiento por períodos considerables: de 3 años (menores C, D y H), de 7 años (menor B) y de 20 años (menor I).

99. El Grupo de Trabajo considera que las autoridades han dirigido sus actuaciones contra varones jóvenes. Las autoridades de Bahrein denegaron las debidas garantías procesales a los menores de edad en todas las fases del procedimiento. Por ejemplo, los menores de edad E y F fueron detenidos mientras jugaban en la calle, lo cual da a entender que las autoridades se consideraban en libertad para actuar contra niños vulnerables sin fundamento jurídico y haciendo un uso claramente abusivo de su poder. Los tribunales abundaron en ello imponiendo penas a los menores de edad en contravención del artículo 37, párrafo b, de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual la detención de los niños solo ha de utilizarse como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Aunque algunas de las condenas se suspendieron o estaban sujetas a libertad condicional, la respuesta del Gobierno no deja ver que las autoridades buscaran alternativas, como órdenes de orientación, asesoramiento, educación y formación profesional, que aseguraran que los niños fueran tratados de manera apropiada para su bienestar de conformidad con el artículo 40, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 24, párr. 95 a).

<sup>23</sup> *Ibid.*, párr. 95 h).

<sup>24</sup> Prohibido en virtud de la regla 43, párr. 3, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

<sup>25</sup> Regla 18.1 de las Reglas de Beijing y CRC/C/BHR/CO/4-6, párr. 44 d).



100. El Grupo de Trabajo ha determinado la arbitrariedad de la detención y reclusión de varones jóvenes en su jurisprudencia relativa a Bahrein<sup>26</sup>. En mayo de 2017 el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por las denuncias de tortura de personas que eran menores de edad en el momento de su detención y de encarcelamiento de menores de edad<sup>27</sup>. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación por la detención arbitraria de niños, por noticias de malos tratos a los que los niños se veían sometidos por la policía y en los centros de detención y por el presunto uso de la tortura por agentes del orden para obtener confesiones de niños detenidos<sup>28</sup>. El presente caso forma parte de esta pauta general dirigida contra niños, en particular varones.

101. Se detuvo a los nueve menores de edad por motivos discriminatorios, a saber, por su género y su edad. Ello contraviene los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto y el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y es arbitrario conforme a la categoría V.

#### Observaciones finales

102. Preocupa al Grupo de Trabajo la salud física y psicológica de los menores de edad, en particular la de quienes siguen detenidos. Algunos tienen problemas de salud que necesitan tratamiento (el menor de edad A sufre una discapacidad en la infancia que le afecta a una pierna y necesita de una intervención quirúrgica). Algunos de los menores de edad llevan más de dos años reclusos (menores G, H e I), mientras que otros llevan más de un año reclusos (menores A, B y D). El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga en libertad de manera inmediata e incondicional a los menores de edad que siguen reclusos y a que vele por que se les dispense atención médica. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

103. El presente caso forma parte de los más de una docena que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con detenciones arbitrarias en Bahrein<sup>29</sup>. Muchos de ellos siguen una pauta de detenciones que no se ajustan a las normas internacionales y presentan alguno de los elementos siguientes: reclusión con acceso limitado a la revisión judicial; denegación del acceso a abogados; confesión forzada; reclusión en régimen de incomunicación; régimen de aislamiento; juicios ante tribunales que no gozan de independencia; tortura y malos tratos; y denegación de atención médica. En determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático, u otras privaciones graves de libertad, en violación de las normas del derecho internacional, pueden constituir crímenes de lesa humanidad<sup>30</sup>.

104. El Grupo de Trabajo acogería con satisfacción la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno para abordar sus preocupaciones en torno a la privación arbitraria de libertad. Dado que ha transcurrido un tiempo considerable desde su última visita a Bahrein, que tuvo lugar en octubre de 2001, estima que sería conveniente realizar otra visita. En agosto de 2017 el Grupo de Trabajo dirigió al Gobierno una solicitud de visita al país. Habida cuenta de que Bahrein es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, convendría que el Gobierno invitara al Grupo de Trabajo a visitar el país. El Grupo de Trabajo espera que la solicitud reciba una respuesta favorable.

<sup>26</sup> Opiniones núms. 41/2015, 27/2014 y 25/2014.

<sup>27</sup> CAT/C/BHR/CO/2-3, párrs. 26 y 27.

<sup>28</sup> CRC/C/BHR/CO/4-6, párrs. 26 y 27.

<sup>29</sup> Opiniones núms. 31/2019, 79/2018, 51/2018, 13/2018, 55/2016, 35/2016, 41/2015, 23/2015, 37/2014, 34/2014, 27/2014, 25/2014, 22/2014, 1/2014, 12/2013 y 6/2012.

<sup>30</sup> Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

## Decisión

105. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de los nueve menores de edad es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

106. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Bahrein que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los nueve menores de edad sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

107. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluido el riesgo que corre el bienestar físico y psicológico de los menores de edad, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad a los que siguen reclusos y conceder a todos ellos el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

108. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los menores de edad y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

109. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes.

110. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión a través de todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

## Procedimiento de seguimiento

111. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad a los menores de edad que se encontraban reclusos en el momento en que se aprobó la presente opinión y, de ser así, en qué fechas;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los nueve menores de edad;

c) Si se han investigado las violaciones de los derechos de los nueve menores de edad y, de ser así, el resultado de las investigaciones;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Bahrein con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

112. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

113. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de

preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

114. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>31</sup>.

*[Aprobada el 21 de noviembre de 2019]*

---

<sup>31</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.

## Annex

### Summary of allegations concerning the nine minors

		<i>Age at time of arrest/ date of arrest</i>	<i>Arrest warrant and reasons for arrest</i>	<i>Contact with family</i>	<i>Access to lawyer</i>	<i>Torture or ill-treatment</i>	<i>Forced confession</i>	<i>Charges</i>	<i>Sentence</i>
1	Minor A	14  13 Nov. 2018	Father not informed of reasons for summons	Held incommunicado for 3 days.	Minor only met lawyer at two court sessions.  Lawyer not present at sentencing.	No	No	Illegal assembly, rioting, and possession of Molotov cocktails	Six months in juvenile centre (with possible further 6 months) for illegal assembly.
2	Minor B	15  13 May 2018	No arrest or search warrant, no reasons given	Limited contact for 15 days following arrest.	Lawyer not present at interrogation and minor not allowed to contact lawyer.	Yes	Yes – by minor and others	Espionage (acquitted), rioting, carrying bombs and Molotov cocktails	Seven years in prison, revocation of citizenship, fine of 200 dinars.
3	Minor C	15  10 Sept. 2018  16 Jan. 2019	Initially arrested during raid  No warrant or reasons given for second arrest	Family visits only following transfer to prison.  Family not informed of transfer to the Criminal Investigation Directorate.	Minor presented to the Office of Public Prosecution without lawyer.  Lawyer not informed of new charges.	Yes	No	Two attacks on the security forces of Diraz, throwing a fake bomb in Sitra (acquitted), throwing a fake bomb in Al-Daih Town (dropped), organising marches, and illegal assembly	Six months in prison, fine of 200 dinars, and seizure of telephones and a camera for attacks in Diraz.  Six months in prison for illegal assembly and rioting.  Three years in prison for arson.
4	Minor D	16  Aug. 2018	No warrant or reasons given	Friend informed family of arrest.  Family visits only following transfer to prison.	Family did not obtain a lawyer until during the trials.  Minor not allowed to meet lawyer outside the courtroom.	Yes	Yes	Illegal assembly, burning a garden, joining a terrorist group, and rioting	Three years in prison, fine of 100,000 dinars for illegal assembly and rioting.  One year in prison for burning a garden.  Three years in prison for joining a terrorist group.

		<i>Age at time of arrest/ date of arrest</i>	<i>Arrest warrant and reasons for arrest</i>	<i>Contact with family</i>	<i>Access to lawyer</i>	<i>Torture or ill-treatment</i>	<i>Forced confession</i>	<i>Charges</i>	<i>Sentence</i>
5	Minor E	13 14 Feb. 2019	No warrant or reasons given	Family went to police station to look for minor, and were not present during interrogation.  Limited family visits to juvenile centre.	Lawyer not present at interrogation or during minor's six-hour detention at police station.	Yes	No	Illegal assembly	Judicial probation for one year.
6	Minor F	14 14 Feb. 2019	No warrant or reasons given	Family not present during minor's detention at police station.	Lawyer not present during minor's six-hour detention at police station.	Yes	No	Illegal assembly	Judicial probation for one year.
7	Minor G	15 20 Feb. 2017	No arrest or search warrant	Disappeared for 6 days.	Minor only met with lawyer at trial.	Yes	Yes	Rioting and illegal assembly	Judicial probation for 1 year, 18 months in prison for other cases.
8	Minor H	16 22 July 2017	No warrant or reasons given	Denied access to family and held in solitary confinement.	Denied access to lawyer.  Lawyer not informed of minor's presentation to the Office of Public Prosecution.	Yes	Yes – by minor and minor was named by others	Attacking a police car with a Molotov cocktail and illegal assembly	Three years in prison.
9	Minor I	16 5 Oct. 2017	No warrant or reasons given	Held in solitary confinement for long periods.  Family unable to attend trial.	Lawyer not present at interrogation.  Lawyers not permitted to contact minor.  Minor had no contact with lawyer during trial.	Yes	Yes	Several different charges (political gathering, rioting, terrorism), with additional further charges.	Total sentence of 20 years in prison, deprivation of citizenship, and a fine of over 10,000 dinars.